

GUBERNAMENTALIDADES DESPUÉS DE LA CRISIS DE FIN DE SIGLO

GOVERNMENTALITIES AFTER THE END-OF-THE-CENTURY CRISIS

Miguel Denis*

Depto. de Población y Ambiente, Escuela de Sociología FaCES
Universidad Central de Venezuela
migueldenis93@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-5580-8582>

«Cómo citar este artículo»

<https://doi.org/10.37883/rvecs.2026.1.1.04>

Fecha de recepción: 15/07/2025

Fecha de aceptación: 10/11/2025

* Lcdo. en Historia, UCV. Tesista del Doctorado en Ciencias Sociales (UCV), Línea de Teoría Social y Política. Investigador, Centro de Estudios y Museo Fundación John Boulton. Profesor, Escuela de Sociología (UCV). Líneas: Gubernamentalidad y movimientos sociales, estudios de población y fecundidad, prensa humorística s. XIX-XX en Venezuela.



RESUMEN

Como respuesta a las revueltas sociales y a los movimientos emergentes de fin del siglo XX, surgidos del descontento frente a las reformas estructurales de la globalización y del “libre mercado”, comenzó a gestarse una reforma “posneoliberal” de la gubernamentalidad, diseñada como estrategia de inclusión y de captura de los sujetos sociales emergentes. Ante el desgaste de la representación tradicional (partidos y sindicatos), este proceso introduce mediaciones sociales basadas en políticas asistenciales, mecanismos de endeudamiento privado, prácticas clientelares derivadas del manejo arbitrario y privado de los recursos públicos, fomentando, a su vez, la legitimación carismática e identitaria de los liderazgos. Si bien la expansión crediticia de la primera década del siglo XXI facilitó cierta apertura “progresista” y la ampliación de estas políticas, la crisis de 2008 marcó un punto de inflexión. A partir de entonces, emergió una deriva autoritaria, sustentada en la exigencia de que los individuos deben “hacerse responsables de la deuda” acumulada, acompañada de la instrumentalización de identidades excluyentes por parte de los nuevos liderazgos.

Palabras clave: Gubernamentalidad/ posneoliberalismo/ clientelismo/ deuda/ identidad/ comunidad.

ABSTRACT

In response to the social unrest and emerging movements of the late 20th century, which arose from discontent with structural reforms of globalization and the “free market,” a “post-neoliberal” reform of governance began to take shape. This reform was designed as a strategy to include and harness the power of emerging social groups. In the face of the erosion of traditional representation by parties and unions, this process introduced social mediations based on welfare policies, private debt mechanisms, and clientelist practices derived from the arbitrary and private management of public resources. It also promoted the charismatic and identity-based legitimization of leadership. The credit expansion of the first decade of the 21st century facilitated a certain “progressive” opening and the expansion of these policies. However, the 2008 crisis marked a turning point. An authoritarian shift then emerged, based on the idea that individuals should “take responsibility for the debt” they had accumulated. This shift was accompanied by the new leadership’s instrumentalization of exclusionary identities.

Keywords: Governmentality/ Post-Neoliberalism/ Clientelism/ Debt/ Identity/ Community.

INTRODUCCIÓN

La crisis social y de gobernabilidad generada por las reformas neoliberales y el llamado “Consenso de Washington” –caracterizada por acontecimientos en América Latina como el Caracazo de 1989 en Venezuela, los levantamientos indígenas ecuatorianos de 1990 y 1994, las jornadas del 2001 en Argentina, o las guerras del agua y del gas en Bolivia en el 2000 y el 2003 respectivamente, así como la batalla de Seattle de 1999 como punto de ebullición del movimiento alter globalización en Europa y Estados Unidos– dieron lugar a una reforma de la gobernanza global, en donde el funcionamiento del libre mercado pasó de estar acompañado por un rol social y desarrollista del Estado y del capital financiero, instaurando una agenda inclusiva o “progresista”.

En su obra *El Malestar de la Globalización* (2002), Joseph Stiglitz, Premio Nóbel de Economía en el 2001 y vicepresidente senior del Banco Mundial entre 1997 y 2000, narra su experiencia en las instituciones financieras que han conducido la política de la globalización, fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). El autor describe cómo la apertura al libre mercado, las privatizaciones, la austeridad para el sector público y la desregulación de la economía fueron impuestas de manera dogmática y hegemónica por el FMI y demás instituciones globales, como condición para acceder a recursos para el desarrollo, refinanciar deudas y promover la inversión extranjera.

Tras la recesión inicial y el empobrecimiento de amplios sectores de los países en desarrollo, la apertura al libre mercado global prometía trazar un camino hacia el crecimiento económico y la prosperidad. Sin embargo, terminó consolidándose una tendencia contraria. En la práctica, una mayor dependencia del financiamiento internacional y con más presión de los acreedores, la promoción de un incentivo competitivo en las economías nacionales para precarizar el trabajo como estímulo a la inversión extranjera (Franco, 1999, p. 54-55), escenario que se vio agravado por una mayor concentración de capital asociado a la especulación y las ganancias a corto plazo o las inversiones de riesgo en el marco de la desregulación, la corrupción gubernamental en el traspaso de recursos públicos a privados, en definitiva, todas estas dinámicas confluyeron para profundizar aún más la exclusión y la pobreza.

Stiglitz expone cómo el libre mercado abrió el paso a la consolidación de un poder financiero transnacional, orgánicamente involucrado en la gobernanza mediante la participación directa de sus directivos en la conducción de las instituciones globales. El fracaso social de las medidas del llamado consenso

de Washington y el creciente descontento frente al libre mercado, expresado tanto en el movimiento alterglobalización como en las luchas populares latinoamericanas, forzaron una reforma de la política globalizadora. Durante las primeras décadas del siglo XXI, esta transición impulsó el financiamiento de proyectos sociales y humanitarios bajo un enfoque "posneoliberal" de la gobernanza global; un proceso impulsado por figuras como el propio Stiglitz y Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre 1998 y 2005, junto a otros altos ejecutivos del mundo financiero-institucional.

A través de una investigación documental y analítica de historia reciente, este trabajo se propone identificar las prácticas emergentes de mediación social y legitimación política en el marco de las reformas planteadas frente al desgaste de los mecanismos representativos tradicionales y el desborde de la movilización social entre finales del siglo XX y comienzos del XXI; prácticas que integran la formación de lo que abordamos como *gubernamentalidad posneoliberal*. Las condiciones y relaciones de poder que forman parte de este proceso conducen un ciclo de la historia reciente que lleva al auge actual de los autoritarismos, de manera que esta investigación está conducida por la necesidad de rastrear la genealogía de la crisis democrática contemporánea y entender la dinámica histórica en la que transcurre. En consecuencia, el objetivo es comprender y caracterizar la deriva de la gubernamentalidad posneoliberal, analizando sus mecanismos de captura, inclusión y subordinación de los sujetos sociales emergentes, así como sus estrategias de legitimación convertidas en nuevas tecnologías de gobierno desde la experiencia de América Latina.

DEUDA E INCORPORACIÓN A LA FORMA-EMPRESA

Los sociólogos Peter Miller y Nikolas Rose (1990) desarrollan el concepto de gubernamentalidad planteado por Foucault¹, a partir del estímulo a la sensación de libertad en el neoliberalismo, dirigido hacia una cultura del emprendimiento y de la creatividad competitiva entre los individuos, como una gobernanza para maximizar el crecimiento y la eficiencia, tercerizando las responsabilidades de la iniciativa y la gestión en los propios individuos. En definitiva, como explotación de la vocación de autonomía.²

¹ Desarrollada en los cursos de Seguridad territorio y población y nacimiento de la biopolítica en 1978 y 1979 respectivamente.

² The values of self-realization, the skills of self-presentation, self-direction and selfmanagement are both personally seductive and economically desirable. Again, expertise plays the role of relay, teaching managers the arts of self realization that will fulfil them as individuals as well as employees.

La acción de gobierno se legitima en la medida en que garantiza y estimula esa vocación de libertad en las personas, al mismo tiempo que hace funcionar una dinámica competitiva que tiende a dispersar las formas organizativas o solidarias de la vida social, acorde con el desmantelamiento de las instituciones del bienestar y la seguridad social. Sin embargo, las consecuencias de la crisis social a fin de siglo en América Latina dan paso a efervescentes movimientos sociales que ejercen una presión significativa sobre la gobernabilidad, mientras que construyen experiencias asociativas de autonomía social desde los márgenes, que permiten interpelar la legitimidad del poder político, así como la racionalidad excluyente del mercado competitivo. Es en este contexto donde el reto del hacer político convierte la autonomía en una conducta operativa para la gobernanza, integrando simultáneamente esa vocación de autonomía en su estrategia de legitimación.

El giro posneoliberal no supuso un retorno a la defensa de lo público y la seguridad social, sino una expansión del financiamiento, tanto privado como estatal, hacia programas sociales para la "protección" dirigidos a grupos caracterizados como vulnerables. El objetivo central era lograr su "inclusión" en la sociedad de mercado mediante el impulso de microempresas, el subsidio al consumo o la capitalización de los fondos de ahorro. En paralelo, este modelo promovió megaobras de infraestructura orientadas a incrementar las exportaciones y a afianzar la inserción en el comercio global (aquí se destacan los proyectos de infraestructura translatinoamericanos, IIRSA y Plan Puebla-Panamá). En consecuencia, la inversión pública pasó a compensar el funcionamiento deficitario y excluyente del libre mercado, mientras que dio paso a una mayor integración y dependencia de la sociedad con el capital financiero.

Para la socióloga Beatriz Stolowicz (2010), este proceso constituye una reestructuración de las políticas sociales a partir de la "demolición" previa del modelo de pacto social basado en el trabajo regular y protegido, así como en el impulso de la flexibilización y el mercado competitivo, trayendo consigo un marcado incremento del desempleo, la exclusión y la desigualdad.

El desempleo y el empobrecimiento son concebidos como la "oportunidad" para emprender esa reestructuración y lograr su legitimación. La reestructuración tiene por objetivo central disolver a los sujetos colectivos de la pugna distributiva, desde luego, los populares. Pero a

yees. Economic success, career progress and personal development intersect in this new expertise of autonomous subjectivity (Miller y Rose, 1990, p. 27).

diferencia del discurso "neoliberal" ortodoxo sobre la libertad individual, el "posneoliberal" apunta a que la flexibilización y la precarización laborales, la tercerización mediante pequeñas y medianas empresas (pymes) y el autoempleo sean aceptados como medios legítimos para acceder a la "equidad". El posneoliberalismo busca legitimar la "democracia de propietarios" neoliberal. Esa sociedad patrimonialista de individuos "propietarios" de algo que intercambian en el mercado "como si fueran libres e iguales", es decir, sin impedimentos formales para acceder a los bienes, servicios, actividades o profesiones excepto por lo que acrediten poseer (recursos monetarios o "capital humano"); en la que desaparece la condición asalariada formal (derechos jurídicos individuales y colectivos, regulaciones) para convertir a los trabajadores en "empresarios" que gestionan individualmente su reproducción, individuos responsables por su destino que "invierten" en su seguridad ("costos de oportunidad", seguros de salud, fondos de pensiones, etc.) con recursos de su fondo de consumo salarial o que está en manos del Estado vía impuestos, y que va a parar al capital privado que gestiona esos fondos de ahorro y seguros. Los posneoliberales "corrigen" los defectos del mercado mediante el discurso y el método social-liberales de la equidad como igualdad de oportunidades: solo a los discapacitados y muy pobres se les proporciona, mediante subsidios o asignaciones, un mínimo no igual ni permanente que los transforma en poseedores de capital humano (capacidades y habilidades empleables), para que puedan incorporarse al mercado y también formar parte de la democracia de propietarios (...) el discurso de la equidad social-liberal presenta al asistencialismo como un vehículo para la afirmación de la autonomía y la creatividad individuales intercambiables en el mercado. (p. 5)

Por su parte, Stollowicz destaca cómo el giro posneoliberal se apropia de las críticas a la globalización y al neoliberalismo utilizando el lenguaje de la inclusión, la protección social y la igualdad de oportunidades. De este modo, transmuta la vocación de autonomía de los sujetos sociales contemporáneos en la figura del "empresario de sí mismo", integrándolos a los circuitos de distribución, valorización y acumulación del capital financiero mediante el acceso al consumo³.

³ La "inclusión" también está planteada para "reducir la desigualdad" (no hay léxico de la izquierda que no haya sido expropiado). ¿Cómo? Accediendo al consumo, aunque sea endeudándose y de por vida, engrosando así las ganancias del capital importador, comercial y financiero, que suelen ser uno solo (...) La inyección de dinero fresco por el Estado con transferencias monetarias condicionadas y financiando las inversiones privadas, también con exenciones fiscales, así como la elevación especulativa de precios de exportación de los productos del extractivismo, alentó el crecimiento

Esta expansión del financiamiento social se sostuvo gracias al incremento del crédito, de las rentas públicas derivadas de la exportación de materias primas en América Latina y la imposición de tributos regresivos como el impuesto al valor agregado; todo en paralelo a la flexibilización fiscal para las inversiones privadas y transnacionales. Sin embargo, detrás de este flujo de dinero, emerge la deuda como una relación de poder que interviene y condiciona la vida social, erigiéndose como una pieza clave de la gubernamentalidad posneoliberal.

A medida que los mecanismos de representación tradicionales (partidos políticos, sindicatos y asociaciones gremiales) pierden su capacidad para mediar frente a las demandas emergentes de las poblaciones excluidas, ese espacio de mediación es cooptado por nuevas dinámicas de gobierno. Estas lógicas se expresan en el modo en que el capital financiero interviene y regula la sociedad, consolidándose hoy como el núcleo del modelo de desarrollo de la globalización y de las sociedades del llamado libre mercado.

El capital financiero legitima su proceso de concentración de riqueza, no bajo el dominio de la producción y la expansión de ganancias, sino a través de la extracción de una renta sobre la vida social. Este mecanismo opera a partir de la gestión y distribución del dinero, concebido hoy como el medio de producción final y la abstracción total de la riqueza para su acumulación global desterritorializada. El poder de las finanzas no emana simplemente de la propiedad del dinero, sino de su capacidad para capturar una renta como productividad extraída de su administración en el mercado. Al abrir, cerrar o filtrar los flujos monetarios, el capital interviene directamente en la distribución de los recursos disponibles, el consumo, el abastecimiento, la inversión o la fuga de capitales. De este modo, asegura la extracción de rentas bajo la

desde 2004. No alcanzaban las fanfarrias para celebrar el éxito del modelo posneoliberal del "nuevo desarrollo". El endeudamiento de los pobres no importaba mientras siguieran pagando. Pero llegó la crisis de 2008. Además de la cesación de pagos en Estados Unidos, estallaron movimientos de "no pago" en varios países; el más importante por su volumen fue en la India, porque implicó el repudio y condonación de deuda de 40 millones de pequeños campesinos y comerciantes deudores en medio de suicidios masivos. Pero también en Nicaragua, inundado de capital extranjero en microfinanzas. Como los microcréditos ya no son seguros si los deudores se rebelan contra la usura, el capital financiero internacional lanza una nueva operación para asegurar ganancias: la llamada Inclusión Financiera. La inclusión consiste en la bancarización forzosa, y para ahorrarle costos a la banca (incluido personal) se usan las tecnologías de computación y celulares, en lo que están todas las transnacionales metidas, empezando por Bill Gates y las telefónicas. El principal actor es el Estado: que legisla para obligar a colocar en la banca todo el fondo de consumo de los que viven de su trabajo actual y pasado. Esta conceptualización de Ricardo Antunes (los que viven de su trabajo) permite abordar el complejo mundo del trabajo en la acumulación, más allá de si son formales o informales. La inclusión financiera los abarca a todos: el Estado hace que pasen por la banca las transferencias de las políticas sociales, las nóminas, las jubilaciones y pensiones, el pago de los servicios y de los impuestos. Y además el Estado paga comisiones a los bancos por el servicio de la bancarización. La tarjeta de crédito es desplazada por la tarjeta de débito, negocio sin riesgos. El asunto crucial es este: ¿qué significa, en términos de ganancias, disponer aunque sea por un día de todo el fondo de consumo de los que viven de su trabajo, de esos inmensos montos de dinero? (Stolowicz, 2017, pp. 31-32).

forma de *deuda*, induciendo una profunda dependencia en todos los procesos de la reproducción social.

Para la racionalidad posneoliberal, la precariedad inicial de recursos del individuo para emprender e involucrarse en el mercado competitivo intenta subsanarse mediante créditos, préstamos u otras herramientas de financiamiento, mientras que la pobreza extrema de las poblaciones más excluidas se atiende con transferencias sociales paliativas. En ambos escenarios, el financiamiento supone establecer una relación de poder basada en el endeudamiento mercantil o político con el fin de estimular el consumo. Sin embargo, no solo los individuos han quedado atrapados en esta lógica; desde la década de 1970, tanto las empresas como los Estados han asumido el crédito y la deuda como mecanismos de financiamiento regulares e imprescindibles para su funcionamiento.⁴ Al respecto, Mauricio Lazzarato advierte:

La economía de la deuda se caracteriza, entonces, por una doble ampliación de la explotación de la subjetividad: extensiva (porque no solo concierne al empleo industrial o de servicios, sino a todas las actividades y condiciones) e intensiva (porque concierne a la relación consigo mismo, bajo la forma del empresario de sí mismo a la vez responsables de «su», capital y culpable de su mala gestión, cuyo paradigma es el «desempleado» (...)) La economía de la deuda ocupa también el terreno de lo político, porque utiliza y explota el proceso de constitución «ético-político», para transformar a cada individuo en sujeto económico endeudado. (Lazzarato, 2013, p. 60)

Pese a la dependencia instaurada con los administradores financieros, la producción de la vida social ya no está sometida a una regulación disciplinaria análoga a la de la fábrica o la burocracia. Por el contrario, opera desde la externalidad: el capital delega las decisiones sobre qué y cómo producir en la iniciativa individual, siempre y cuando se garanticen las condiciones del pago de la deuda.

En este marco, Lazzarato concibe la relación acreedor-deudor como una relación de poder que condiciona las acciones humanas. Este control trans-

⁴ "El incremento de la deuda del Estado es uno de los principales resultados de las políticas neoliberales que, desde mediados de la década de 1970, persiguen el objetivo de transformar la estructura de financiamiento de los fastos del Estado benefactor. Desde este punto de vista, la ley más importante, sancionada por todos los estados europeos, es la prohibición de monetizar la deuda social a través del Banco Central respectivo. Las colectividades locales, al igual que la totalidad de los servicios sociales del Estado benefactor, ya no pueden financiarse mediante la emisión de moneda por parte de dicho banco y deben recurrir a los mercados financieros. Es lo que se da en llamar «independencia del Banco Central», que en buen romance significa, antes bien, la dependencia respecto de los mercados, porque aquella ley establece la obligación de recurrir los acreedores privados y aceptar las condiciones dictadas por lo propietarios de títulos, acciones y obligaciones." (Lazzarato, 2013, p.p. 21-22).

ciende la esfera laboral para abarcar la totalidad de la vida social, e incluso proyectarse hacia el futuro, cimentándose en una "moral del deudor". Bajo esta ética, el individuo, erigido en empresario de sí mismo, se compromete "libremente" a actuar con responsabilidad para cumplir con sus reembolsos, aspirar a la solvencia y culparse a sí mismo si fracasa⁵.

Esta relación de poder que no regula el comportamiento sino que lo condiciona a través de dejar correr la libertad en un espacio limitado por las responsabilidades con el capital y las variaciones o modulaciones de intereses en el mercado, es lo que Foucault y Deleuze definieron como la transición del poder disciplinario a la sociedad de control.⁶ Sus ejes rectores son la externalidad frente a la vida social y la sustitución de la explotación –relacionada a la producción de ganancias– por la extracción de rentas como mecanismo de poder.⁷ Las mediaciones que se forman en la gobernanza contemporánea también se rigen por esta dimensión de control financiero y externalidad.

La acción gubernamental busca construir un vínculo con la sociedad prescindiendo del reconocimiento de las estructuras representativas tradicionales, las cuales se ven desbordadas por demandas y mecanismos de participación cada vez más heterogéneos. En su lugar, fundamenta su poder en la facultad discrecional de financiar y desfinanciar a los sujetos sociales. Estos cálculos de gobernabilidad oscilan entre la satisfacción de ciertas demandas, la reproducción de la dependencia y el control de las agendas políticas y sociales. Existe, por tanto, una disposición estratégica orientada a capturar la voluntad de autonomía en los sujetos contemporáneos, neutralizando cualquier potencial autogestionario para afianzar relaciones de acree-

⁵ El poder de la deuda se representa como si no se ejerciera por represión ni por ideología: el deudor el «libre», pero sus actos, sus comportamientos, deben desplegarse en los marcos definidos por la deuda que ha contraído (...) Se es libre en la medida en que se asume el *modo de vida* (consumo, empleo, erogaciones sociales, impuestos, etc.) compatible con el reembolso (Lazzarato, 2013, p. 37).

⁶ Ver el célebre *Post-scriptum sobre las sociedades de control* de Gilles Deleuze publicado en 1990.

⁷ "¿Cómo se puede utilizar el concepto de extractivismo para leer la manera de actuar del capital financiero? El capital financiero tiene una relación de exterioridad con la cooperación social; ésta produce el valor del que el capital financiero se apropia y la apropiación de valor funciona de una manera que, para decirlo en términos clásicos, se acerca más a la renta que a la ganancia. El capital industrial para explotar el trabajo tiene que organizarlo, tiene que entrar a la manera misma de actuar de la cooperación social y laboral; tiene entonces una relación de interioridad a la cooperación social y laboral. En cambio, el capital financiero tiene una relación de exterioridad. El tema de las hipotecas es un buen ejemplo. Las hipotecas llamadas *subprime*, como se sabe, han sido la raíz de la crisis global que todavía vivimos. Cuando una mujer negra, soltera en Estados Unidos hacía un contrato para una hipoteca subprime, es bastante claro que el capital financiero tenía que valorizarse por la contribución de esta mujer negra soltera [...] El capital financiero no organiza el trabajo de esta mujer, pero ella debe cumplir con su obligación de pagar cada mes y el capital financiero simplemente explota el trabajo y formas de cooperación social que se organizan afuera de su modalidad de actuación. En este sentido, creemos que se puede decir –de forma conceptualmente precisa– que el capital financiero tiene una relación 'extractivista' con la cooperación social: el valor es producido afuera de la capacidad de organización del capital financiero que se apropia de este valor extrayéndolo de la cooperación social." (Hardt, Negri y Mezzadra, 2013, p. 57)

dor-deudor a partir del control financiero. Se configura así una gobernanza flexible, cuya viabilidad para mediar con los movimientos sociales radica en su aptitud para instrumentalizarlos mediante el control financiero.

Las nuevas formas de control para enfrentar este desafío de las sociedades en movimiento, a diferencia de las anteriores centradas en la disciplina que representa un pensamiento negativo, normalizador y reglamentador, buscan apoyarse en los fenómenos existentes, «no intentar impedirlos, sino, por el contrario, poner en juego otros elementos de lo real, a fin de que el fenómeno, en cierto modo, se anulara a sí mismo». En vez de reprimir y prohibir, se trata de regular la realidad haciendo que unos elementos actúen sobre los otros, anulándolos. (...) En esta nueva realidad el panóptico se ha vuelto arcaico (aunque sigue funcionando, no es desde hace tiempo el medio fundamental de control). Lo que se requiere para gobernar grandes poblaciones son formas de control a distancia, más sutiles, formas que buscan la «anulación progresiva de los fenómenos por obra de los fenómenos mismos», lo que requiere un tipo de acción menos transparente que la del soberano para dar paso a una acción «calculadora, meditada, analítica, calculada». Las clases dominantes deben actuar ahora sobre una multitud de factores, pero ya no en relación de exterioridad –como el príncipe de Maquiavelo– sino en relación de inmanencia respecto de los movimientos que intentan domesticar o, mejor, reconducir hacia modos que beneficien a los grupos dominantes. Si para el soberano se trataba de evitar que sus súbditos se movilizaran, ya que el hecho mismo de hacerlo ponía en cuestión su condición, ahora el arte de gobernar incluye, como una más de sus técnicas, la movilización social callejera. (Zibechi, 2007, pp. 252-253)

Mientras se produce esa externalización del capital, que lo aleja de la organización del proceso productivo, paradójicamente, las tecnologías de gobierno son cada vez más inmanentes a los códigos del conflicto social, regulando los flujos de recursos y capital sobre la sociedad como intervenciones en un mercado de gobernabilidad/conflictividad, que buscan ejercer cierta administración de la insatisfacción y la regularización de la posición dependiente.

Siguiendo el planteamiento de Raúl Zibechi, los mecanismos de regulación de la protesta social pueden pasar por la estimulación de liderazgos y organizaciones en la medida que permite condicionar sus agendas, fraccionar amplios movimientos de protesta a través de concesiones puntuales o arbitrarias, financiar grupos progubernamentales paralelos que se enfrenten con

la base de los movimientos, involucrar a dirigentes en posiciones privilegiadas o incluso hacer del apoyo financiero un estímulo a los intereses particulares y disolventes de las prácticas colectivas o solidarias que mantienen la cohesión de una organización, entre muchas otras que se observan diariamente en las luchas sociales de las últimas décadas.

El financiamiento del movimiento social disuelve sus mecanismos autónomos de funcionamiento, reconfigurándolos en función de las necesidades y jerarquías propias de la forma-empresa. Este proceso se materializa a través de diversas vías: la proliferación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG); el estímulo del endeudamiento para el emprendimiento; o la consolidación de relaciones clientelares que empiezan a caracterizar las formas de financiamiento estatal.

Nancy Fraser (2018, pp. 99-100) comenta al respecto que la expansión de microcréditos para las mujeres en el marco de la promoción de emprendimientos individuales desde la década de 1990 vendría a sustituir los programas públicos de ayuda social, produciendo no solo la generalización de la forma-empresa y la relación crédito-deuda sino también una sobrecodificación de la lucha de las mujeres por su autonomía económica, ahora como proyecto de emprendimiento/endeudamiento.

La adopción de la forma-empresa aísla al activismo o la militancia social de sus procesos organizativos de base. Esta lógica concentra sus actividades en la gestión de "proyectos sociales" con financiamiento externo, imponiendo condiciones que van desde la extracción de información (elaboración de informes e indicadores sociales) hasta la restricción de la participación política, lo que naturaliza su dependencia financiera. En consecuencia, el horizonte de acción de los movimientos muta: la formación "profesional" para la administración de recursos para proyectos sociales desplaza las dinámicas de participación colectiva, y las reivindicaciones de autonomía social son sustituidas por la gestión de fondos o prestación de servicios a poblaciones vulnerables. Incluso cuando ciertos fondos "filantrópicos" transnacionales o fondos sociales nacionales financian estas iniciativas de movimientos sociales sin exigir ninguna condición o intercambio de favores, la obligación de centralizar y jerarquizar la administración de los recursos termina por fragmentar, desmovilizar e incluso incentivar el acomodo privilegiado y la corrupción en las propias organizaciones⁸. En definitiva, esta estrategia opera como un mecanismo de contención

⁸ El caso reciente de la Fundación Black Lives Matter en EEUU es uno de los ejemplos más evidentes de este mecanismo. Tras la denuncia de los

frente a las revueltas emergentes que pasa por acomodar a los liderazgos (erigiéndolos como figuras desvinculadas de su colectivo), fomentar la actitud competitiva en torno a la captación de recursos y diluir los mecanismos originales de autorrepresentación.

MEDIACIONES POS-REPRESENTATIVAS, FINANCIAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICAS ASISTENCIALES

En su trabajo sobre clientelismo político, Javier Ayuero (2004) analiza prácticas consolidadas en la década de 1990, principalmente por el Partido Justicialista (PJ) del peronismo argentino, conductor de la deriva neoliberal de la época, como mecanismos de mediación con las comunidades periféricas y desempleadas. En este escenario, la política social pasa a ser administrada, de forma arbitraria, por jefes territoriales, quienes distribuyen los recursos públicos destinados a la subsistencia con el fin exclusivo de construir una base social propia y "acumular capital político". Dado que esta asistencia es apenas suficiente para la sobrevivencia e incapaz de revertir la precariedad, garantiza que los llamados paradójicamente "beneficiarios" deban mantener buenas relaciones con los punteros (representantes del jefe político) que administran las "ayudas" bajo el criterio del intercambio clientelar. Así, se distribuyen o "invierten" financiamientos como una operación para la extracción de una "renta política" a favor del partido o incluso para el capital político privado de un "dirigente" particular, configurando, en el fondo, mecanismos de privatización de los recursos públicos.

Incluso cuando los recursos provienen de políticas públicas diseñadas para garantizar algún derecho social (alimentación, salud u otro), el acceso a estos derechos queda condicionado por una forma de endeudamiento político. En la práctica, el aparato clientelar ofrece estos recursos como beneficios extraordinarios, presentándolos como dádivas concedidas gracias a la generosidad, el favor o el supuesto amor de un jefe político determinado. Mediante

asesinatos de afroamericanos en acciones policiales violentas y sin causa judicial, desde el año 2013 comienza una campaña de protesta contra el racismo y la violencia policial que llegan a tener un auge masivo con la difusión del video en que es asesinado al afroamericano George Floyd por el estrangulamiento que ejerce un funcionario policial en una operación de revisión en la calle, mientras George repetía sucesivamente la frase "I can't breathe" "no puedo respirar", en el año 2020. La ola de indignación convierte el eslogan de #BlackLivesMatter en una tendencia global y da paso a una ola de protestas masivas en EEUU. La fundación que tenía el nombre de esta campaña, empieza a recibir una gran cantidad de donaciones en donde se destacan las de grandes grupos filantrópicos corporativos como la Open Society. Al año siguiente las 3 fundadoras y directoras de la organización reciben múltiples denuncias de corrupción por la compra de varias casas de coste millonario y en sectores de élite, así como la malversación de millones de dólares por servicios a empresas de familiares. Las denuncias terminan por implosionar la organización y debilitar en gran medida la credibilidad del movimiento (Peirón, 2021) (Diario Las Américas, 2022).

esta lógica, el ciudadano es degradado a la condición de "beneficiario" al que se le exige lealtad y apoyo político como muestra de gratitud personal; una dinámica que pervierte y desmantela cualquier premisa democrática⁹.

Mientras que los partidos tradicionales operaban como organizaciones ideológicas sustentadas en la representación de intereses socioeconómicos colectivos, los actuales partidos-empresas ofrecen liderazgos que disputan la capitalización de la política pública. Mediante el despliegue publicitario, estas figuras buscan forjar lazos afectivos con sus votantes-clientes, consolidándolos mediante el intercambio de favores. En este sentido, la confianza ya no se articula en torno a un partido, un proyecto ideológico o la defensa de un grupo social en particular, sino alrededor de la figura/marca personal. Este escenifica el intercambio clientelar como una acción determinada por su personalidad, apelando de forma exclusiva a los intereses de sujetos individualizados.

Aunque Ayuero (2004) focaliza su estudio en el clientelismo del PJ de Argentina, esta matriz resulta similar a la de partidos como Acción Democrática (AD) en Venezuela o el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México. Originalmente, estas prácticas aparecen como un síntoma de la crisis institucional y del giro de la socialdemocracia latinoamericana hacia el consenso neoliberal a finales del siglo XX. Sin embargo, lejos de ser un fenómeno en declive, el clientelismo reemplazó la crisis de representatividad por una nueva forma de legitimación, consolidándose durante el ciclo de gobiernos neopopulistas (también llamados "progresistas") a principios del siglo XXI. La relación clientelar aparece como reacción a la emergencia social y la conflictividad desatada por el crecimiento de las comunidades precarias, neutralizando a los movimientos sociales que amenazaban con deslegitimar al poder gubernamental. Finalmente, este tejido clientelar se afianza mediante la individualización de las necesidades, la distribución de pequeñas cuotas de poder a quienes hacen el "trabajo social" y la normalización de la violencia social; todo ello en un escenario marcado por la feroz competencia para acceder a los recursos del Estado.

En las últimas décadas, la asistencia social financiada por presupuestos nacionales e internacionales se ha incrementado progresivamente, en la me-

⁹ "La apelación al Estado y esta dimensión "social" son los signos distintivos del "posneoliberalismo" para presentarse como progresista y hasta de izquierda. La estrategia planteaba que en el corto plazo se implementara el asistencialismo focalizado hacia la extrema pobreza para absorber tensiones sociales por la (primera) "década perdida", que de paso iría liquidando la cultura de derechos sustituyéndola por una degradada cultura mendicante agradecida. (Stolowicz, 2010, p. 4)

dida en que se tiende a empobrecer la seguridad social compuesta por las contribuciones del trabajo formal (cada vez más reducido por el avance del trabajo informal). La asistencia surge para la atención en condiciones de emergencia, sin embargo, más que resolver la situación de exclusión tiende a regularizarla y ampliar la demanda de atención, haciendo de la emergencia una condición natural del funcionamiento de la política social¹⁰. La asistencia social establece una relación con las personas bajo la condición de "vulnerabilidad", lo cual supone la falta de capacidades propias para responder o adaptarse a riesgos que no permitan garantizar condiciones de vidas indispensables como la flexibilización laboral, la precariedad de la economía familiar o la violencia social, que tienden a agravarse en el contexto de una apertura a un escenario de riesgos y oportunidades determinados por los movimientos de la economía global (Celade, 2002, pp. 5-6).

La incertidumbre frente a las oscilaciones del mercado y la crisis del aseguramiento público han convertido al riesgo y la emergencia en elementos cotidianos de la vida contemporánea. Paradójicamente, este escenario también actúa como un estímulo para la actitud especulativa del capital financiero en su búsqueda de mayores rentas. En este contexto, la atención a la vulnerabilidad se plantea, en teoría, fortalecer las capacidades y recursos de las personas para sacar adelante una economía propia sostenible o que se hagan responsables de sí mismas. Sin embargo, en la práctica predomina la distribución de recursos paliativos. Esta dinámica afianza relaciones de dependencia que terminan por regularizar la vulnerabilidad y el contexto social que las reproduce, operando como una estrategia de inclusión para las comunidades excluidas.

Al respecto, Rolando Franco (1996) ilustró en la Revista de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sobre la transición de las políticas sociales dominantes (Estado de Bienestar) hacia las emergentes (financiamiento social) de la siguiente manera:

¹⁰ En el caso del financiamiento humanitario de la ONU a través de OCHA (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) ha pasado de 2.030 millones de dólares en el año 2000, a 16.040 en el 2010 y luego a 29.220 millones de dólares en el 2020.

Cuadro 1
Paradigmas de la política social

	Dominante	Emergente
Institucionalidad	Monopolio estatal Financia Diseña Implementa Controla Funciones unificadas Centralismo	Pluralidad de subsectores Estatal Privado (comercial) Filantrópico (ONG) Informal (familia) Funciones separadas Descentralización
Proceso de decisión	Burocrático Estrategias macro "El Estado sabe" Asignación de recursos por vía administrativa Usuario sin elección	Por proyectos Asignación competitiva Licitaciones El usuario propone "La capacidad de innovación está diseminada en toda la sociedad y debe aprovecharse" (Fondos de inversión social)
Financiamiento		
Fuente de los recursos	Estatal	Cofinanciación "Lo que no cuesta, no vale" Recuperación de costos: "el que puede, debe pagar" Riesgo: marginar pobres
Asignación de los recursos	Subsidio a la oferta Falta de competencia	Subsidio a la demanda Creación de cuasimercados Competencia Libertad de elegir ¿Tiene el consumidor información suficiente?
Objetivo	Universalismo de la oferta Alto costo, bajo impacto Oferta homogénea disponible favorece a los informados y organizados	Universalidad de la satisfacción Tratar desigualmente a quienes son desiguales socialmente*
Criterio de prioridad en la expansión del sistema	Ampliación progresiva de arriba hacia abajo Acceso segmentado "A menor gasto social, menos equidad"	Primero los más necesitados Instrumento: la focalización
Población beneficiaria	Clase media Grupos organizados	Pobres
Enfoque	Centrado en los medios Infraestructura social Gasto corriente	Centrado en los fines Impacto: magnitud del beneficio que recibe la población objetivo, según los fines buscados
Indicador utilizado	Gasto público social	Relación costo-impacto

(Franco, 1996, p. 13)

El paradigma de atención universal y estatal, en el que el gasto público se distribuía de manera centralizada mediante grupos organizados tradicionales, como gremios y sindicatos, ha sido sustituido por una administración basada en proyectos. Esta transición, que sustituye una modalidad de atención regular por intervenciones a corto plazo, desata una doble competencia: por un lado, la captación de fondos públicos o privados; y por otro, entre los propios aspirantes a recibir asistencia. Asimismo, este nuevo esquema condiciona la ayuda a estrictas formas de intercambio, obligando a los beneficiarios a someterse al levantamiento de datos, al endeudamiento crediticio o a cualquier otro compromiso asumido con los financistas.

La socióloga Maxine Molyneaux (2007) estudia el caso del programa "Oportunidades" impulsado por agencias internacionales en México en la década de 1990, para asistir a mujeres en condición de pobreza, en donde la transferencia de dinero para la subsistencia tiene como contraparte una "co-gestión" de riesgos y esfuerzos dedicados a garantizar la salud, el bienestar, la educación y el cuidado de los hijos e hijas, así como una serie de trabajos comunitarios a realizar por parte de las mujeres.

Molyneaux registra una serie de críticas de las participantes por imponer cargas de trabajo que no pueden cumplir por las demandas cotidianas de cuidados y las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran, generando tensiones con quienes llevan a cabo el programa (pp. 26-27), pues aunque se presenta como el acceso a un derecho social relacionado al sostenimiento de sus familias, finalmente se ejecuta como un acuerdo de contraprestación que además relega a las mujeres una serie de tareas que reproducen el sesgo de responsabilizar únicamente a las mujeres por el bienestar familiar y comunitario. Los recursos recibidos tampoco suponen un ingreso salarial formal, de manera que terminan por convertirse en una forma de trabajo de cuidados o comunitario precarizado bajo la forma de una política asistencial. A su vez, la discriminación entre las mujeres seleccionadas para recibir los recursos y las excluidas del programa también generó tensiones en la comunidad, por los criterios utilizados para la selección como consecuencia de una política asistencial no universal.

Molyneaux también analiza la transformación de un extenso movimiento de comedores populares autogestionados por comités de mujeres en Perú, que, tras la crisis de la década de 1980, pasan a ser subsidiados en la década siguiente por programas estatales, expandiéndose de 7.5 millones a 12 millones de personas involucradas, pero perdiendo autonomía y convirtiéndose en una base social de los gobiernos de turno que empezaron a movilizar a

las madres con fines proselitista y electorales (2007, p. 34). El financiamiento externo termina por construir relaciones de dependencia entre las organizaciones sociales convertidas en beneficiarias que permiten cierta autogestión de las formas de trabajo, emprendimientos o proyectos a realizar, al mismo tiempo que les demanda formas de compromiso informales reproduciendo los mecanismos del trabajo precario y flexible, así como del clientelismo. En el caso de las mujeres (que jefaturan gran parte de los hogares vulnerables y forman parte de los grupos priorizados para la asistencia social), los programas sociales recuperan códigos de cierta vocación al cuidado o al trabajo voluntario para la comunidad relacionado a la identidad materna, como mecanismo para afianzar la demanda de porciones de trabajo desreguladas y tercerizar en ellas la labor organizativa para su ejecución.

Es por ello que Molyneaux caracteriza estas políticas como *maternalistas*, mientras expresan una atención dirigida más hacia la crisis de la reproducción social que hacia las garantías de remuneraciones sostenibles en el mercado de trabajo.

En gran medida, las ONG ejecutan una parte importante de la asistencia social que proveen las instituciones globales, financiándose mediante una mezcla híbrida de aportes filantrópicos, corporativos y multinacionales. A diferencia de la burocracia del Estado moderno, no operan como empleadas de estas entidades; su vínculo se asemeja más al del trabajador autónomo, erigido por el capital como un "empresario de sí mismo". Se trata de activistas que emprenden la búsqueda de recursos para ejecutar proyectos asistenciales, bajo la condición de abstenerse de participar en actividades políticas. Así, la gestión de recursos prescinde de los mecanismos de representación social y recae en la articulación entre financistas y activistas dentro de una especie de mercado de financiamiento, donde las organizaciones compiten o cooperan para lograr el acceso a los recursos.

Este modelo instaaura una administración de la política social mucho más flexible y adaptable, liberada del peso burocrático estatal al operar mediante proyectos de duración limitada. Consecuentemente, las ONG absorben e institucionalizan una parte del activismo: la histórica movilización reivindicativa es convertida en la mera búsqueda de fondos, operando como una estrategia para asimilar a las organizaciones sociales emergentes. En esta transición, los liderazgos tecnocráticos, hábiles para el "lobby", y la captación de recursos formados para la gestión institucional, desplazan al espacio asambleario y la participación comunitaria como espacios de producción política de los movi-

mientos, es decir, *la legitimidad como expresión genuina de la participación social tiende a entrar en tensión con una legitimidad construida por la capacidad de hacer fluir los recursos financieros de arriba hacia abajo*. Sometidas a esta lógica, las organizaciones terminan incorporando las agendas, criterios y discursos dictados por las instituciones financieras para garantizar su selección.

A partir de la década de 1990, en el marco del giro posneoliberal, grandes instituciones globales como el Banco Mundial y las agencias de las Naciones Unidas priorizaron el financiamiento de proyectos vinculados a la participación social, la organización y la economía comunitaria. Su propósito era establecer un marco de mediación con los sujetos emergentes que protagonizaron las revueltas contra la exclusión durante la década anterior.

En este contexto, Stolowicz (2010, p. 6) plantea una reivindicación de cierto “comunitarismo”, distinto al individualismo inicial de la agenda neoliberal. El objetivo era habilitar formas de mediación y protección social para los excluidos mediante el apoyo a organizaciones locales dispersas, las cuales actúan como paliativos frente a la pobreza. Esto genera una ficción de “participación y empoderamiento”, aunque estas comunidades logran administrar recursos mínimos asignados, carecen de capacidad real para presionar sobre la distribución de la riqueza o incidir en las decisiones del sistema político.

Por esta vía, las ONG se masificaron como agencias intermediarias para el financiamiento de proyectos comunitarios. La relación entre estas organizaciones y los movimientos sociales varía según la capacidad organizativa y la autonomía de los últimos, abarcando desde la subordinación por el control de recursos hasta el fortalecimiento del tejido social.

Para ilustrar esta dinámica, Zibechi (2007, p. 254-261) analiza la experiencia ecuatoriana, donde, tras los levantamientos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en la década de 1990, se desplegó un importante flujo de financiamiento hacia las comunidades indígenas bajo la política de los proyectos para el desarrollo orientados por las instituciones globales. Al igual que en otros países de la región, esta intervención financiera extranjera afianza la racionalidad del individuo-empresa, expande la competitividad de mercado y sustituye la participación de las organizaciones sociales por la administración de las agencias externas que ejecutan los proyectos. Consecuentemente, introduce relaciones de dependencia y desmantela la economía social sustentada en los vínculos familiares y comunitarios. No obstante, el caso de Ecuador presenta una particularidad: la presencia histórica de un extenso tejido de organizaciones comunitarias constituido por la articulación entre el movimiento indígena y las políticas para el desarrollo.

El antropólogo Víctor Breton destaca el rol de la teología de la liberación desde la década de 1960, no solo en las luchas por la tierra, sino también en la promoción de mecanismos de ayuda social. Estas iniciativas permitieron mejorar las condiciones de vida, afianzar organizaciones comunitarias propias y defender la identidad india; un enfoque donde sobresale la labor de la Iglesia de Monseñor Leonidas Proaño en Riobamba. Posteriormente, ante las crisis del Estado social y el aumento del financiamiento internacional para el desarrollo en los años ochenta y noventa, proliferaron las ONG. En paralelo, se expandió el tejido de organizaciones comunitarias que terminarían integrándose a la estructura de la CONAIE. Como repercusión del levantamiento de 1994, en 1998 se creó el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indios y Negros del Ecuador (PROPEDINE). Este programa estableció que el diagnóstico, la ejecución y la administración de los proyectos recayeran directamente en las Organizaciones indígenas-comunitarias de Segundo Grado (OSG), concebidas como estructuras aglutinadoras de las organizaciones de base o de primer grado (Bretón, 2001, p. 234).

En su balance final sobre la experiencia ecuatoriana, Bretón (2001, pp. 246-249) expone cómo las OSG conformaron una capa de dirigentes/intermedarios más como una exigencia en la relación con la gestión del financiamiento externo y las habilidades técnicas para ello, que por la capacidad de representar organizaciones de base. De ahí se derivó una situación de competencia entre las OSG por el acceso a los fondos, y se profundizó la separación con las bases comunitarias. Asimismo, emergió una dirección tecnocrática atravesada por pugnas por el control político y financiero entre liderazgos personales, caudillismos y relaciones clientelares con las comunidades. Todo ello coincidió con la consolidación de una clase política indígena, impulsada por su acceso a gobiernos locales y su mayor capacidad de incidencia política.

Paradójicamente, la directriz del PROPEDINE de delegar la administración a las organizaciones comunitarias multiplicó el tejido social indígena como vía de acceso al financiamiento. Aunque esto generó un entramado organizativo excepcional en los Andes ecuatorianos, no se tradujo en una mejora de las condiciones de vida. Para ilustrar este fracaso, Bretón señala el caso del Cantón Guamote (Chimborazo) en 2001: el territorio con la mayor densidad de organizaciones comunitarias y, simultáneamente, con los índices más altos de pobreza y mortalidad infantil.

La CONAIE ha atravesado diversos ciclos de auge y debilitamiento, determinados en gran medida por el contraste entre tres factores: la corriente

socio-histórica formada por los procesos de lucha social; la dinámica técnico-institucional ligada a la gestión de los proyectos de desarrollo; y la formación de una dirigencia política orientada al control de gobiernos locales y representación parlamentaria. No obstante, la excepcional experiencia ecuatoriana demuestra cómo la articulación entre los movimientos sociales y las ONG logró afianzar un tejido organizativo tan amplio y duradero que ha sostenido la legitimidad de la confederación durante cuatro décadas. Pese a las tendencias tecnocráticas o burocráticas, estas bases han protagonizado históricas movilizaciones contra los tratados de libre comercio, logrando frenar en reiteradas ocasiones las reformas neoliberales impulsadas por la gobernanza financiera global, medidas que operaban como la otra cara de la misma agenda para el desarrollo.

Por su parte, el vínculo asistencial desplegado como mecanismo de gobernanza por instituciones internacionales y nacionales, ONG o redes clientelares instaaura una forma de mediación ajena a los procedimientos de la democracia representativa. En su lugar, subordina el acceso a los recursos a un compromiso tecnocrático, moral o proselitista. Cuando el condicionamiento es tecnocrático, el modelo se legitima apelando a la racionalidad jerárquica y la estratificación propia de la forma-empresa. En contraste, cuando adquiere un carácter moral o proselitista, el sistema legitima y proscribe conductas dictadas por la "responsabilidad clientelar", instrumentalizando la afectividad, el sentido de pertenencia y la identidad colectiva para forjar vínculos de lealtad como nuevos ejes de cohesión social.

IDENTIDADES, CARISMA Y MITIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD, ESTRATEGIAS DE LEGITIMACIÓN Y CAPTURA DESDE LA EXCLUSIÓN

En los espacios nacionales y periféricos excluidos de los flujos de acumulación transnacional y del mercado global, los movimientos sociales han constituido horizontes político-sociales identitarios que toman la tradición histórica de sus comunidades como reivindicación de la diferencia frente a la homogeneización de la sociedad global y como rechazo a la exclusión. Al respecto, Enzo del Bufalo (2005) caracteriza a estos movimientos como "neoarcaistas". Esta categorización obedece a que reaccionan contra la globalización cohesionándose en torno a la recuperación de tradiciones o códigos identitarios de prácticas sociales antiguas. Lejos de ser una táctica temporal, efectúan una reinterpretación mesiánica del pasado: en lugar de

proyectar un futuro democrático o igualitario, revalorizan antiguos vínculos despóticos amenazados por el orden global.¹¹

Por su parte, la crisis del desarrollismo y del Estado de Bienestar estimula un rechazo a la secularización moderna. Frente al nomadismo impuesto por la exclusión contemporánea, surge la urgencia de reconstituir la vida en torno a una figura ideal de comunidad. Sin embargo, esta búsqueda no articula a los sujetos con sus realidades concretas, sino que mitifica la cohesión social. Deriva así en un comunitarismo subordinado a la restauración de figuras patriarcales, religiosas o militares erigidas como el origen mítico de la identidad nacional. En esta matriz se inscriben los movimientos fundamentalistas religiosos, el bolivarianismo o los patriotismos latinoamericanos y otros nacionalismos segregados. Todos ellos operan como proyectos sociopolíticos al margen de la globalización occidental¹², nacionalizándose para ocupar el espacio de los Estado-nación debilitados¹³ y logrando administrar, de este modo, el tejido social disperso en la exclusión.

El comunitarismo emergente en los movimientos sociales contemporáneos se mitifica por la búsqueda de una comunidad originaria. Esta visión singularizada no remite a las comunidades contemporáneas reales ni a su diversidad, sino a una comunidad como unidad ideal anclada a un tiempo mesiánico antes que histórico. En el fondo, este imaginario refleja un proyecto de centralización del mando social que aparece como horizonte reaccionario frente a la dispersión del conflicto social neoliberal. Así, los movimientos se

¹¹ "si se vive el presente con valores del pasado, entonces el futuro ya no es posible, sino como simple reiteración del pasado. Cuando esto ocurre, entonces los excluidos cuyo asomarse, como sujeto social transformador, se expresa, como dijimos, en esos movimientos neoarcaicos, son integrados al orden social despótico y asumen los valores y discursos establecidos o refluían hacia una exclusión permanente y, en este caso, el discurso neoarcaico se asocia al ascenso social de un pequeño grupo dirigente que desplaza a otro en el ámbito del mismo orden despótico" (Del Bufalo, 2005, p. 6)

¹² Occidente se forma históricamente como el espacio de intercambio y construcción de una identidad cultural en el espacio multinacional que nace en el Mediterráneo europeo, que luego se expande hacia los océanos con los imperios coloniales-modernos y que ha formado una hegemonía global después de la Segunda Guerra Mundial a través de la alianza entre EU y Europa. Occidente también es referido como el proyecto civilizatorio que, aunque tiene un origen europeo, su genealogía está en el espacio social de intercambio que forma la economía global y cuyo sujeto es el individuo como figura universal, reconocido por ejemplo, en las declaraciones de derechos humanos. La idea de una cultura occidental se ve así tensada tanto por lo relativo a la historia europea como por lo relativo a sus premisas universales, lo que genera un uso confuso y contradictorio en el lenguaje político actual. Sin embargo, se relaciona con la globalización y el capitalismo transnacional que surgió después de la guerra fría y bajo la hegemonía estadounidense.

¹³ De aquí que esta tendencia gubernamental tienda a converger en una articulación global contraria a la hegemonía occidental (los llamados BRICS, por ejemplo), en donde también han ocurrido las reformas neoliberales a través de la imposición de Estados fuertemente autoritarios y con una vocación totalitaria, heredados del hilo de continuidad histórica entre imperios antiguos y burocráticos modernos, que casi no ha sido interrumpido por experiencias democráticas representativas. Así la "comunidad internacional" ha transformado su imagen hegemónica anclada en la llamada cultura occidental, por una comunidad primero multipolar y luego con una tendencia a la polarización geopolítica entre occidente y oriente, que recubre la polarización entre globalismos y nacionalismos.

enfrentan a la tensión de construir aparatos políticos fuertemente jerarquizados y centralizados para disputar el poder estatal (bajo la bandera de nacionalismos revolucionarios, fundamentalismos religiosos, militarismos mesiánicos), los cuales capturan y resignifican los códigos de la vida comunitaria, la familiaridad y las identidades tradicionales. En este contexto, el trabajo comunitario se concentra en actividades educativas, de formación política y deportivas. Su propósito es cultivar un espíritu colectivo de disciplina y convicción colectiva; una dinámica que, en escenarios de violencia armada o inseguridad, busca revitalizar una personalidad fuerte y "guerrera" en los jóvenes varones. Consecuentemente, esto reafirma el carácter patriarcal y el culto a la autoridad como figuras asociadas al tejido social afectivo de las comunidades excluidas.

El sociólogo Manuel Castells interpreta esta tendencia como una reacción conservadora ante la amenaza que supone la globalización para las instituciones tradicionales, el Estado-nación y la familia patriarcal. Quienes la impulsan son los excluidos que provienen de los aparatos de poder tradicionales, hoy desplazados por la cultura individualista, multicultural y los modos de vida flexibles de la globalización. Una muestra evidente de esta tensión recae en el papel de la mujer; aunque son ellas quienes protagonizan y cohesionan las organizaciones y la vida comunitaria, los movimientos aferrados a la recuperación de valores tradicionales perciben al feminismo y a la perspectiva de género como una amenaza que divide a la comunidad.¹⁴

El fundamentalismo religioso, el nacionalismo cultural, las comunas territoriales son, en general, reacciones defensivas. Reacciones contra tres amenazas fundamentales, percibidas en todas las sociedades por la mayoría de la humanidad en este fin de milenio. Reacción contra la globalización, que disuelve la autonomía de las instituciones, las organizaciones y los sistemas de comunicación donde vive la gente. Reacción contra la interconexión y la flexibilidad, que difumina los límites de la pertenencia y la participación, individualiza las relaciones sociales de producción y provoca la inestabilidad estructural del trabajo, el espacio y el tiempo. Reacción contra la crisis de la familia patriarcal, raíz de la transformación de los mecanismos de construcción de la seguridad, la socialización, la sexualidad y, por lo tanto, de los sistemas de la personalidad. Cuando el mundo se vuelve demasiado grande para

¹⁴ Por ejemplo, la activista y dirigente de la CONAIE, Nina Pacari, plantea que: "En el movimiento indígena no hay una resistencia a incluir mujeres. Habrá una u otra voz. Pero una resistencia, no hay. Lo que sí ha habido es preocupación cuando se pretende organizarse solo como mujeres, confrontando lo comunitario. Lo que hay que hacer es, no obstante, organizarse como mujeres en un contexto de equiparar lo comunitario como pueblo originario (...) Desde nuestra perspectiva indígena, no planteamos el tema de género sino desde la complementariedad hombre-mujer (Muggenthaler et al., 2020, p. 115).

ser controlado, los actores sociales pretenden reducirlo de nuevo a su tamaño y alcance. Cuando las redes disuelven el tiempo y el espacio, la gente se ancla en los lugares y recuerda su memoria histórica. Cuando el sustento patriarcal de la personalidad se quiebra, la gente afirma el valor trascendente de la familia y la comunidad, como voluntad de Dios. Estas reacciones defensivas se convierten en fuentes de sentido e identidad mediante la construcción de nuevos códigos culturales a partir de materiales históricos. Como los nuevos procesos de dominación a los que reacciona la gente están insertos en los flujos de información, la construcción de la autonomía ha de basarse en la inversión de estos flujos. Dios, patria, familia y comunidad proporcionarán códigos eternos e indestructibles en torno a los cuales se organizará una contraofensiva a la cultura de la virtualidad real. (Castells, 1999, p. 89).

Castells plantea esta reacción defensiva como un recurso de salvación frente a la incertidumbre y la inseguridad. Estas no solo derivan de la precariedad material de las condiciones de vida, sino también de la sensación de incapacidad de hacerse de una solución propia, lo que engendra la necesidad de recurrir a una fuerza externa: un espíritu mítico o un soplo del pasado capaz de reconstruir una voluntad decidida. De este modo, las demandas concretas de los movimientos y la ética participativa de las luchas sociales se entrecruzan con dinámicas de liderazgo y sociedad amparadas en códigos salvacionistas. Estas lógicas buscan recuperar alguna figura idealizada –y, por lo tanto, ajena a la realidad concreta– ya sea la familia tradicional añorada y en crisis, un nacionalismo orgulloso frente al mundo disolvente del espacio globalizado, o una norma moral que interpele la violencia y la hipersexualización juvenil. Se establece así como una vía de escape frente a la desestructuración de las saturaciones intensivas de un ritmo de vida regido por la demanda autoimpuesta de productividad. Ciertamente, existe un incentivo para despojarse de la voluntad, de la toma de decisiones cotidiana y entregarse al liderazgo. Es allí donde la identidad opera como vínculo político que habilita la confianza que permite esa entrega.

Paralelamente, aunque la cultura de los movimientos sociales se forma en la apertura a experiencias participativas y democráticas, en su sentido más amplio, subyace una tendencia que condiciona la participación a una moral de lealtad y disciplina de corte militar. Esta vertiente deposita la esperanza de salvación en la conducción política, valiéndose de códigos y símbolos que refuerzan la identificación colectiva mediante la épica y ciertas jefaturas carismáticas. La relación entre carisma y personalidad despótica resulta clave, tal como expone Enzo Del Bufalo en el siguiente fragmento:

La subjetividad despótica tiene dos aspectos fundamentales: el rostro de expresión hacia el cual convergen todas las cadenas de significación y la mirada de los súbditos que son las personas que lo observan y ven, en él, el fantasma producido por su propio deseo (...) el déspota remite a algo que no es su cuerpo personal el cual tiende a desvanecerse para que este algo aparezca y ese aparecer carga de un nuevo valor afectivo y su fisiología se vuelve carismática (Del Bufalo, 2009, pp. 450-451)

Este reflejo del deseo del cuerpo social en el rostro del déspota como expresión del poder carismático, nos lleva a la experiencia de los movimientos populares de Venezuela en la década de 1990, en donde se encuentran los movimientos barriales y estudiantiles urbanos con el movimiento militar "bolivariano", particularmente la figura de Chávez.

Bajo este panorama, Roland Denis (2001) (militante destacado de diversos movimientos populares) plantea las siguientes claves:

...dijimos en un momento que la rebelión de calle es atea, centrada en los retazos ideológicos que va armando y en sus propios esfuerzos. El chavismo se muestra más bien lleno de una sensibilidad religiosa; necesita de una trascendencia que la materialidad del presente no le da. La calle, cual nómada, centra su orgullo en sus propias conquistas, no reconoce ninguna unidad que no sea la que ella es capaz de parir en su tiempo y espacio. Trata de deducir de ella misma el modelo de sociedad que habremos de construir utilizando cualquier herramienta útil que encuentre dentro de la inmensa fábrica de esperanzas que el mundo y el pueblo latinoamericano han inventado para sostener sus luchas. El chavismo frente a esto es más bien romántico, nostálgico, regresa a la búsqueda de una unidad perdida en los tiempos vaciados por la ignominia de los dirigentes. En el ahora le da igual aferrarse al radicalismo más extremo o a la -tercera vía-. Se cree en todo caso salvacionista de la patria perdida y se percibe a sí mismo como el único puente capaz de garantizar la reconquista del pasado glorioso.

(...) ¿Qué pasa entonces cuando estos dos personajes tratan de dialogar y buscan fundirse en una misma obra de poder? La figura líder y caudillesca que se ha concentrado sobre Hugo Chávez obliga en un primer momento que el diálogo casi se borre por completo. Lo que existe en un centro único que oye sugerencias, propuestas, ideas, para luego decidir y definir a puertas cerradas lo que mejor cree, quebrando así uno de los principios más importantes de la rebelión de calle y el hacer de su modo de resistencia (p. 22)

Este fragmento anticipa la tendencia hegemónica que marcaría la relación entre el Estado y los movimientos sociales tras la llegada del chavismo al poder en 1998. En una línea similar, la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui (2010, pp. 214-215) destaca el papel que ocupa la interpretación del pasado en la construcción identitaria del katarismo boliviano. Este movimiento de jóvenes indianistas de finales del siglo XX, sobre todo entre sus corrientes urbanas, compensó su desconexión con el mundo rural mediante la glorificación de un pasado remoto, a contravía de la historia reciente. En consecuencia, el discurso identitario indianista y la interpelación de las visiones de la historia pasaron a integrar la retórica proselitista y gubernamental de Bolivia. Este proceso se consolidó primero con la integración de políticos provenientes del katarismo a la gobernanza en la década de 1990, y luego con la incursión gubernamental de gran parte del movimiento social liderado por la figura de Evo Morales.

Mientras estas fuerzas se afianzaban en regiones donde la exclusión neoliberal quebró la gobernabilidad e impulsó una renovación "revolucionaria" de la clase política, en los territorios y metrópolis articulados a la economía global, la gobernanza posneoliberal también se legitimaba mediante la apropiación carismática de las identidades. Pero no es el mito de la comunidad igualitaria lo que la anima, sino el del individuo-empresa que, debido a las discriminaciones expuestas por los movimientos de mujeres, de la diversidad sexual o de poblaciones racializadas, se ve impedido de realizarse plenamente, a la par de la figura hegemónica del hombre blanco heterosexual. Entonces una mujer empresaria, un político homosexual o un presidente afroamericano aparecen como figuras pioneras que permiten criticar la tradición patriarcal o racista del poder, pero más que cambiar la vida real de las mujeres, los homosexuales o los afroamericanos, son símbolos de una gobernanza que apela a la creación de vínculos afectivos-identitarios para mantener su legitimidad en la medida en que cede su rostro para que se aloje una presencia que pueda captar la confianza del público.

En este contexto, Nancy Fraser (2008) advierte cómo el feminismo, la diversidad sexual y otras expresiones culturales comenzaron a priorizar las demandas de reconocimiento por encima de las exigencias socioeconómicas. El sistema absorbe estas demandas a través de políticas de identidad, fomentando la aceptación institucional de la diversidad de expresiones identitarias, sexuales y culturales, y su incorporación como tales en las instituciones y espacios de poder. Sin embargo, en lugar de forjar una verdadera igualdad de condiciones para todos, el modelo se limita a asimilar individuos específicos que funcionan como cuotas de representación.

El ascenso del neoliberalismo coincidió con una gran alteración en la cultura política de las sociedades capitalistas. En este periodo, las exigencias de justicia se expresaron cada vez más como reivindicaciones para que se reconociesen la identidad y la diferencia. Este cambio «de la redistribución al reconocimiento» fue acompañado por fuertes presiones para transformar el feminismo de la segunda ola en una variante de las políticas de identidad (...). El cambio al reconocimiento encajaba muy claramente con un neoliberalismo ascendente, que no quería más que reprimir cualquier recuerdo del igualitarismo social. Así, las feministas absolutizaron la crítica a la cultura precisamente en el momento en el que las circunstancias exigían redoblar la atención a la crítica de la economía política. A medida que la crítica se dividía, además, la corriente cultural no solo se desgajó de la corriente económica, sino también de la crítica al capitalismo que previamente las había integrado. Desligadas de la crítica al capitalismo y dispuestas para articulaciones alternativas, estas corrientes podían ser atraídas hacia lo que Hester Eisenstein ha denominado «un vínculo peligroso» con el neoliberalismo (Fraser, 2008, p. 97).

La incorporación de identidades plurales, contrahegemónicas o subalternas en la imagen y el cuerpo gubernamental se articula con los mecanismos de mediación de las ONG, el clientelismo u otras formas de tercerización de la política social. No obstante, aunque el Estado refleja estas identidades de forma cada vez más nítida, esta dinámica aleja a la población de los espacios de gobierno. En el fondo, este proceso constituye una absorción del marketing y de los sondeos de intereses, emociones e identidades de los consumidores, como nuevas tecnologías de gobierno. Estas herramientas articulan la personalidad del líder carismático, las lógicas de los partidos-empresa y el auge de las comunicaciones de masas y redes en el capitalismo contemporáneo.

Por su parte, el carisma sostiene las instituciones siempre y cuando se expanda el crédito y la capacidad de consumo. Sin embargo, tras la crisis de 2008, la gobernabilidad democrática entró en una fase crítica. La expansión acelerada y descontrolada del endeudamiento, impulsada para estimular el consumo y el crecimiento económico durante la primera década del siglo XXI, llevó inevitablemente a la concentración del poder financiero y a la insolvencia generalizada de los deudores, proceso que finalmente estalló con la crisis financiera de 2008, el desastre de las hipotecas *subprime* y se agravó con la posterior caída de los precios de las *commodities* en 2014. Agotada la balanza,

los rostros carismáticos tienden a convertirse en mandos autoritarios para administrar la recesión, pues tras la bonanza, ahora las personas deben “hacerse cargo de los costos y riesgos” asumidos por las empresas y los Estados.¹⁵

Durante la segunda década del siglo XXI, se han afianzado diversos movimientos de tendencia conservadora o reaccionaria. Su objetivo es canalizar el malestar social a través de la defensa de lo que consideran la identidad del pueblo frente a la diversidad cultural impulsada por la globalización. Esta visión concibe al pueblo como uno, negando los recorridos móviles de las poblaciones históricas y su diversidad cultural, y al mismo tiempo reivindica un antiguo orden social cuya supuesta pérdida se esgrime como la causa de los males presentes. Ejemplos de esta tendencia abundan a escala global: el islamismo en las naciones destruidas por la guerra en Medio Oriente, el hinduismo antimusulmán en la India y los nacionalismos blancos y cristianos en EE.UU. y Europa. A esto se suma el estímulo a la polarización política extrema como justificación del autoritarismo en países como Venezuela y Nicaragua, o en contextos ideológicamente opuestos como Ecuador y Argentina. Todos forman parte de esta tendencia que ha hecho de la defensa de identidades hegemónicas una vía de legitimación para las derivas autoritarias e incluso la violencia política, alcanzando expresiones extremas en el terrorismo islámico o las milicias racistas en Estados Unidos (Negri y Hardt, 2019, pp. 81-94).

En definitiva, si bien la reivindicación identitaria sirvió inicialmente para visibilizar culturas y prácticas históricamente discriminadas, hoy estos discursos políticos identitarios parecen convertirse en mecanismos de exclusión, especialmente cuando sustituyen el reconocimiento de la pluralidad por la reivindicación-imposición de una identidad colectiva homogénea.

CONCLUSIONES

En síntesis, la gubernamentalidad posneoliberal traza una curva histórica que, en su fase inicial, logró contener el impacto social de las reformas precarizadoras de finales del siglo XX mediante la expansión del financiamiento asistencial y la renovación carismática del liderazgo político.

¹⁵ Desde la crisis financiera precedente (2008), que estalló con la burbuja de internet, el capitalismo abandonó los relatos épicos que había elaborado en torno a los «personajes conceptuales» del empresario, el creativo y el trabajador independiente «orgulloso de ser su propio jefe», los cuales, al perseguir exclusivamente sus intereses personales, trabajan por el bien de todos. La implicación, la movilización subjetiva y el trabajo sobre sí mismo, predicados por el management desde la década de 1980, se metamorfosearon en una exhortación a hacerse cargo de los costos y los riesgos de la catástrofe económica y financiera. La población debe tomar a su cargo todo lo que las empresas y el Estado benefactor «externalizan» en la sociedad, y en primer lugar la deuda (Lazzarato, 2013, p. 11).

En este modelo, el vínculo afectivo e identitario con las bases opera como catalizador para legitimar la relación clientelar, o viceversa. Se configura así una matriz de poder que abandona los códigos clásicos de la democracia electoral y la responsabilidad entre representante y representados, para sustituirlos por la lógica de la deuda. Al condicionar el flujo discrecional de recursos, el Estado erigido en "benefactor" logra cooptar y neutralizar la vocación participativa y de autonomía que originalmente impulsaba a los movimientos sociales emergentes.

Estos benefactores se revisten de un sentido de altruismo y de una personalidad dadivosa. Sin embargo, el doble rostro de esta gubernamentalidad se devela cuando la expansión financiera llega a su límite y el sistema comienza a reclamar el pago de la deuda forzosa contraída por las personas para sostener sus condiciones de vida elementales.

Durante años, la bonanza encubrió la descomposición de la democracia: la rutinización de la dependencia no solo regularizó la precariedad material, sino que gestó las condiciones para el surgimiento de una cultura autoritaria, transfigurando la participación política en una apuesta hacia una lealtad personal. En consecuencia, al perder su capacidad de hacer fluir recursos, la figura del padre bondadoso y redentor "agota su carisma". La sensación de frustración reclama entonces un padre autoritario que haga "pagar" a los culpables de la crisis.

Es aquí donde los discursos autoritarios estigmatizan a los deudores empobrecidos mientras ocultan y aceleran los circuitos de acumulación. Con todo, el nuevo autoritarismo no interpela a la cultura competitiva, la cual retorna de forma más agresiva, sino que criminaliza los significantes de "justicia social", "equidad" o "solidaridad" que acompañaron a las políticas asistenciales, eslóganes publicitarios que otrora encubrieron el intercambio clientelar.

El discurso autoritario se llena, pues, de contradicciones estridentes que terminan por legitimar nuevas oleadas de exclusión, ya no como consecuencias indeseables de políticas económicas, sino como objetivos intencionales de su programa. Así, presentamos una síntesis de la curva que ha tomado la gubernamentalidad posneoliberal y su relación con la crisis democrática contemporánea.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ayuerdo, J. (2004). *Clientelismo Político*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Bretón, V. (2001). *Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes ecuatorianos*. FLACSO-ECUADOR, Ediciones de la Universitat de Lleida.
- Castells, M. (1999). *La era de la información*. Volumen II: El poder de la identidad. México: Siglo XXI editores.
- Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) (2002). *Vulnerabilidad sociodemográfica: viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y personas*. Brasilia: CELADE – CEPAL
- Cusicanqui, S. (2010). *Oprimidos pero no vencidos*. La Paz: La mirada salvaje.
- Del Bufalo, E. (2005) *La Naturaleza del Poder y los Movimientos Sociales*. Caracas: *Revista Latinoamericana de Estudios Avanzados* (22).
- Del Bufalo, E. (2009). *Notas de Babilonia*. Caracas: bid & co. editor.
- Denis, R. (2001). *Los Fabricantes de la Rebelión*. Caracas: Editorial Primera Línea. Editorial Nuevo Sur. Caracas.
- Diario Las Américas (22 de mayo de 2022). El ocaso de Black Lives Matter por oscuros manejos financieros. *Diario Las Américas*. <https://www.diariolasamericas.com/eeuu/el-ocaso-black-lives-matter-oscuros-manejos-financieros-n4249419>
- Franco, R. (abril, 1996). Los paradigmas de la política social en América Latina. Santiago de Chile: *Revista de la Cepal*, (58), 9-22.
- Franco, R. (ed.) (1999). *Sociología del Desarrollo, Políticas Sociales y Democracia*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Fraser, N. (2008). El feminismo, el capitalismo y la astucia de la historia. *New Left Review*, 87-104. <https://newleftreview.es/issues/56/articles/nancy-fraser-el-feminismo-el-capitalismo-y-la-astucia-de-la-historia.pdf>
- Hardt, Negri y Mezzadra. (2013). *Biocapitalismo, procesos de gobierno y movimientos sociales*. Quito: FLACSO.
- Lazzarato, M. (2013). *La Fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal*. Buenos Aires: Amorrortu editores.
- Miller, P. y Rose, N. (1990). Governing Economic Life, *Economy and Society*, 19(1), 1-31

- Molyneaux, M. (2007). *Change and Continuity in Social Protection in Latin America Mothers at the Service of the State?*. United Nations Research Institute for Social Development.
- Muggenthaler, F., Hoetmer, R., Robayo, A. y Aguirre, M. (Eds.) (2020). *Nuevas Derechas Autoritarias. Conversaciones sobre el ciclo político actual en América Latina*. Quito: Ediciones Abya-Yala, Fundación Rosa Luxemburgo.
- Negri y Hardt (2019). *Asamblea*. Madrid: Akal.
- Peirón, F. (29 de mayo de 2021). La directora de Black Lives Matter dimite bajo la sombra de la corrupción. *La Vanguardia*. <https://www.lavanguardia.com/internacional/20210529/7489856/directora-black-lives-matter-dimite-sombra-corrupcion.html>
- Stiglitz, J. (2002). *El malestar en la globalización*. Madrid: Taurus, Ediciones Santillana.
- Stolowicz, B. (29 de octubre de 2010). *El "Posneoliberalismo" y la Reestructuración del Capitalismo en América Latina*. Ponencia presentada en el VII Seminario Internacional Marx Vive: América Latina en disputa. Proyectos políticos y (re)configuraciones del poder. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Stolowicz, B. (enero-junio, 2017). El "posneoliberalismo" para una reforzada hegemónica del capital. *Cuadernos de Nuestra América*, 49(27), 25-34.
- Zibechi, R. (2007). *Autonomías y emancipaciones*. Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales UNMSM.